

Santiago, diecinueve de junio de dos mil veinticuatro.

VISTOS Y TENIENDO PRESENTE:

Primero: Que en este procedimiento ordinario de acción reivindicatoria tramitado ante el Cuarto Juzgado Civil de Antofagasta bajo el Rol C-5564-2019, caratulado “Gordo con Macuada”, se ha ordenado dar cuenta de la admisibilidad del recurso de casación en el fondo deducido por el demandante en contra de la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de Antofagasta de fecha tres de noviembre de dos mil veintitrés, que confirmó el fallo de primer grado de veintisiete de marzo del mismo año, que –en lo que interesa al recurso- rechazó la demanda, sin costas.

Segundo: Que el recurrente señala en su arbitrio de nulidad que la sentencia ha infringido los artículos 572, 582, 670, 684, 700, 716, 889, 893, 895 y 897 del Código Civil relación con los artículos 22 y 24 del mismo cuerpo normativo.

Sostiene, en síntesis, que la infracción de las normas antes indicadas, se configura por el hecho que la interpretación dada por la sentencia recurrida no se ajusta a derecho y se aplicaron en forma contraria y distinta al texto expreso de la ley, contrario a su sentido natural y obvio, lo que conllevó a que erradamente se decidiera rechazar la demanda por estimar que el demandante carece de legitimación activa, la improcedencia de la acción respecto de derechos personales y la contravención de los actos propios.

Finaliza solicitando que se invalide la sentencia y se dicte una de reemplazo que acoja la demanda.

Tercero: Que el fallo de primer grado –confirmado en segunda instancia- luego de analizar las probanzas rendidas, da por establecidos los siguientes hechos:

1.-) Que la Sociedad Legal Minera Lima Uno de Sierra Gorda, fue constituida en el año 1994 y tuvo su origen al practicarse la inscripción de cesión de derechos de fojas 939 vuelta bajo el número 227, ambas del Registro de Propiedad del Conservador de Minas de Antofagasta.

El haber social de esta sociedad se encontraba dividido en 100 acciones que se distribuían entre sus socios, 50 acciones para Sociedad Eulogio y Compañía Limitada y 50 acciones para Mohamed Duk Castro.

Consta asimismo, anotación marginal de término de dicha Sociedad Legal Minera, conforme al artículo 199 N° 1 del Código de Minería. Anotación marginal de fecha 13 de mayo de 2011 y rectificadora el 6 de marzo de 2013.

2.-) La Sociedad Eulogio Gordo y Compañía transfirió las acciones de que era titular al demandante de autos, don Manuel Gordo Macuada, haciéndose el actor dueño del 50% de las acciones de la SLM Lima Uno de Sierra Gorda, según



consta de copia de escritura pública de cesión de acciones de 23 de octubre de 2001.

3.-) El 13 de mayo de 2010, la Sociedad Legal Minera Lima Uno de Sierra Gorda, representada por don Mohamed Duk Castro y don Luis Gordo Carcedo, suscribieron con Minera Quadra Chile Limitada, un contrato de opción unilateral de compra de pertenencias de 13 de mayo de 2010.

4.-) El 10 de mayo de 2011, se perfeccionó la venta de las concesiones mineras Lima 1 al 48 y Brasilia 1 al 83, entre Minera Quadra Chile Limitada y la Sociedad Legal Minera Lima Uno de Sierra Gorda, según consta a folio 96, en copia autorizada de la escritura pública de aceptación de la oferta unilateral de compra de las Pertenencias, ya individualizadas, ante el notario don Patricio Zaldívar Mackenna, la que en su cláusula segunda consiga “en este acto, la beneficiaria, debidamente representada según se indica en la comparecencia, manifiesta su aceptación a la oferta irrevocable y unilateral de que da cuenta el contrato de opción celebrado”.

Asimismo, en la cláusula tercera, señala “como consecuencia de la aceptación referida en la cláusula anterior y conforme a lo dispuesto en el inciso cuarto del artículo 169 del Código de Minería, la compraventa de las concesiones mineras materia del contrato de opción referido, ha quedado perfeccionada, por lo cual, a partir de esta fecha, Quadra ha pasado a ser dueña de las concesiones mineras a que se refiere la cláusula primera precedente”.

5.-) El precio pactado en el contrato de venta de las concesiones mineras Lima uno al cuarenta y ocho y Brasilia uno al ochenta, fue de USD 7.000.000.-, pagándose dicha cantidad: a) USD 200.000.- a la suscripción del contrato de opción con fecha 13 de mayo de 2010 y los restantes USD 6.800.000.-, de la siguiente manera: b) USD 1.000.000.- pagaderos a más tardar el día que se cumplan doce meses desde la fecha del contrato de opción, esto es, 13 de mayo de 2011; c) USD 1.500.000.- pagaderos a más tardar el día que se cumplan veinticuatro meses desde la fecha del contrato de opción, esto es, 13 de mayo de 2012; d) USD 1.500.000.- pagaderos a más tardar el día que se cumplan treinta y seis meses desde la fecha del contrato de opción, esto es, 13 de mayo de 2013; e) USD 2.800.000.- pagaderos a más tardar el día que se cumplan cuarenta y ocho meses desde la fecha del contrato de opción, esto es, 13 de mayo de 2014.

Las sumas contempladas en las letras b), c), d) y e), ascienden a la suma de USD 6.800.000.-, que se pagaron en ese acto mediante la entrega de dos cheques endosables a nombre del oferente (Sociedad Legal Minera Lima Uno de Sierra Gorda), que en total suman el saldo del precio referido, documentos que el oferente



debidamente representado, declaró haber recibido a su entera y total satisfacción y por tanto otorgó el más amplio y completo finiquito al respecto.

6.-) El 18 de mayo de 2011, Mohamed Duk Castro entregó el cheque equivalente a la parte del precio por la venta de las pertenencias mineras correspondiente a Sociedad Eulogio Gordo y Compañía Limitada, a Mireya Gordo Macuada, documento que fue endosado con su firma y con la de Mohamed Duk Castro al socio, Sociedad Eulogio Gordo y Cía., para luego ser endosado una segunda vez, mediante firma de doña Mireya Gordo, como representante de sociedad Eulogio Gordo y Cía. a Luis Eulogio Gordo Carcedo, siendo nuevamente endosado por la misma Mireya Gordo al Banco de Chile a nombre y cuenta de Luis Gordo Carcedo y, acto seguido, el mismo cheque, fue endosado por su persona con mandato amplio en favor de Banco Chile Corredores de Bolsa S.A.

7.-) Cipriano Luis Eulogio Gordo Carcedo falleció el 27 de agosto de 2011.

8.-) Que, los herederos de don Cipriano Luis Eulogio Gordo Carcedo, son sus hijos, todos partes en esta causa, Mireya Inés Elena, Luis Eulogio Marcos, Verónica Victoria Paola, Cecilia del Pilar, Francisco Rodrigo Andrés, Manuel Eugenio Fernando, todos, Gordo Macuada, y su cónyuge sobreviviente, doña Elena Mireya Macuada Estay, según consta en certificado de posesión efectiva, dictada por Resolución Exenta N° 4529 de 11 de diciembre de 2020 por el Director Regional del Servicio de Registro Civil de la Región de Antofagasta.

9.-) El 30 de junio de 2017, entre Eulogio Gordo y Compañía, representada por Manuel Pablo Raúl Gordo Carcedo y Manuel Eugenio Fernando Gordo Macuado -el demandante-, se celebró un contrato de transacción, en la que se reconoce, en la cláusula sexta, que las actuaciones de Eulogio Gordo y Compañía le han causado a Manuel Gordo Macuada un perjuicio claro y evidente; que carece de derechos para conservar las sumas de dinero entregadas por la Sociedad Legal Minera Lima Uno de Sierra Gorda, provenientes del contrato de opción unilateral de compra de concesiones mineras, ya que don Manuel Gordo Macuada ya era titular de las cincuenta acciones en la Sociedad Legal Minera Lima Uno de Sierra Gorda.

Cuarto: Que frente a los supuestos fácticos antes descritos y en lo que interesa al recurso de nulidad sustancial entablado por el demandante, el fallo cuestionado reflexiona que el actor pretende reivindicar valores dinerarios producto de la venta de las pertenencias mineras que eran de propiedad de la Sociedad Legal Minera Lima Uno de Sierra Gordo, en la cual el actor era dueño de acciones por medio de la Sociedad Eulogio Gordo y Cía. Limitada; dineros que nunca fueron entregados al actor, por lo que no operó la tradición de aquellos valores dinerarios, pese a que en esta caso puede afirmarse que existió un título, el contrato de cesión de acciones que lo convirtió en socio de la sociedad vendedora.



En ese orden de ideas, la magistratura razona que, habiéndose determinado que el actor no es dueño del precio que reivindica, pues no operó la tradición como modo de adquirir el dominio, se puede concluir que si no tiene el dominio no puede entablar la acción real que protege dicho derecho, en mérito de la naturaleza jurídica de su pretensión, que es una de carácter personal o crédito para exigir el pago de la parte del precio que le corresponde o dinero que lo representa, en los términos que lo expresa el artículo 578 del Código Civil.

Concluye la sentencia en análisis, que respecto al primer requisito de la acción, esto es, que el actor sea dueño de la cosa que se reivindica, no concurre, por cuanto sólo es titular de un crédito o derecho personal, el que no es reivindicable, por lo que decide acoger la excepción de falta de legitimación activa deducida por la demandada.

Luego, el tribunal analiza la concurrencia del segundo requisito de la acción relativo a que la cosa que se reivindica sea singular.

Al respecto, expresa que –como ya se dijo- la cosa pretendida por el actor está representado por una suma de dinero, valores dinerarios que fueron depositados e invertidos en fondos mutuos e instrumentos de renta variable, el que al tener la naturaleza jurídica de un bien corporal mueble y fungible, no es reivindicable, no cumpliéndose, en consecuencia, con la concurrencia del segundo requisito.

Por último, el fallo en estudio estableció como hecho de la causa que el demandante con la actual demanda contraviene sus actos propios anteriores, al pretender exigir parte del precio percibido por la venta de pertenencias mineras; ventas que pretendió declarar inoponibles y nulas en juicios anteriores.

Termina indicando que al no concurrir los requisitos de la acción reivindicatoria, en especial, que el actor no es dueño del dinero reclamado y que los derechos personales no son reivindicables, así como también los bienes fungibles, decide rechazar la demanda.

Quinto: Que para ordenar el raciocinio de los fundamentos que permitirán dilucidar la pertinencia de la impugnación anulatoria, es conveniente señalar, desde luego, que el actor ha ejercido en esta causa la acción reivindicatoria que contempla el artículo 889 del Código Civil, que es la que tiene el dueño de una cosa singular, de que no está en posesión, para que el poseedor de ella sea condenado a restituírsela. En otras palabras, es la acción que tiene el dueño no poseedor contra el poseedor no dueño.

Sexto: Que de lo anteriormente reseñado, se desprende que la acción podrá prosperar siempre que concurren ciertos requisitos, a saber, que: a) La cosa que se reclama sea susceptible de reivindicar; b) El actor reivindicante sea dueño de ella y



que se encuentre debidamente singularizada; c) El reivindicante esté privado de su posesión, y d) El demandado esté en posesión de la especie que se reclama.

Séptimo: Que, como ya fuera enunciado, la sentencia censurada rechazó principalmente la demanda al concluir que el demandante no es dueño de los dineros que reivindica, gozando de un derecho personal para exigir el pago de los mismos.

Octavo: Que asentado lo anterior, queda de manifiesto que las alegaciones del impugnante persiguen establecer hechos no fijados por los sentenciadores, esto es, que el demandante es dueño de la cosa que se reivindica.

En este sentido, resulta pertinente recordar que solamente los jueces del fondo se encuentran facultados para fijar los hechos de la causa y, efectuada correctamente dicha labor en atención al mérito de las probanzas aportadas, ellos resultan inamovibles conforme a lo previsto en el artículo 785 del Código de Procedimiento Civil, no siendo posible su revisión por la vía de la nulidad que se analiza salvo que se haya denunciado de modo eficaz la vulneración de las leyes reguladoras de la prueba que han permitido establecer el presupuesto fáctico que viene asentado en el fallo, lo que no acontece en el caso de autos, ya que en el arbitrio de nulidad el impugnante solo se concentra en desarrollar que existe transgresión a normas sustanciales y no a las reguladoras de la prueba.

Noveno: Que, sin perjuicio de que las razones anteriores bastan para el rechazo íntegro del recurso, cabe señalar que, de conformidad con lo reseñado en los motivos que preceden, se observa que los jueces del fondo han efectuado una correcta aplicación de la normativa atinente al caso que se trata, por cuanto también se ocupan de aclarar que lo pretendido en autos dice relación con un derecho personal y no real, declaración que constituyó otra razón para desestimar la demanda.

Sobre ello, es oportuno recordar lo que la doctrina enseña sobre los elementos de la posesión y el papel que cumple la posesión material ante una controversia sobre aquella, discusión que suscita el ejercicio de la acción de dominio.

Los profesores Alessandri, Somarriva y Vodanovic en su libro “Tratado de los Derechos Reales”, en referencia a la teoría clásica de la posesión, que postula que aquella consta de dos elementos, a saber, el corpus y el animus -conjetura que sigue el Código Civil chileno-, exponen en relación con el primero de ellos, que “el corpus es un poder físico o potestad de hecho sobre la cosa”, añadiendo que “Savigny afirma que el corpus no supone necesariamente el contacto inmediato del hombre con la cosa poseída; consiste en un poder de dominación, en la posibilidad física de disponer materialmente de la cosa, en forma directa e inmediata, con



exclusión de toda intromisión de extraños”, y que “el Código Civil chileno señala como elemento de la posesión la tenencia, es decir, la ocupación material y actual de la cosa, y ocupación significa apoderamiento, tener una cosa en nuestro poder, y se tiene no sólo cuando existe aprehensión física, sino también cuando hay la posibilidad de disponer de ella, en forma directa e inmediata, sin injerencia extraña alguna. Nuestro Código Civil sigue, pues, la concepción del corpus sustentada por Savigny”. En referencia al elemento “animus”, sostienen los autores que aquél es de carácter psicológico o intelectual y consiste en la intención de obrar como propietario, como señor o dueño o en la intención de tener la cosa para sí. (Tomo I, páginas 359 y 360).

Entonces, si lo que se reclama es un crédito y no el dinero en sí mismo, no sólo es imposible estimar satisfecho el requisito de la singularización de la cosa reclamada, por las razones que acertadamente expresa el fallo en revisión, sino que tampoco resulta viable pretender que exista una posesión sobre un objeto material susceptible de reivindicar.

Lo relevante de la acción real es el poder de aprovechar la cosa y perseguirla de manos de quien la detente, en circunstancias que el derecho personal consiste en la facultad de obtener una conducta determinada de una persona que ha contraído la obligación correlativa, como la que en la especie se atribuye a las demandadas (Corte Suprema, Rol N° 33.869-2021).

Décimo: Que por último, en cuanto a la decisión de rechazar la demanda por estimar que los valores dinerarios no son objeto reivindicable, los sentenciadores han hecho una correcta aplicación de la normativa al caso, ya que solo pueden ser reivindicadas las cosas infungibles o identificables.

En efecto, “el objeto de las acción reivindicatoria, en principio, es una cosa corporal, mueble o inmueble, de carácter singular (artículos 890 y 889 del Código Civil). Aunque el Código no consideró necesario explicitarlo, es obvio que sólo procederá sobre cosas apropiadas y que sean identificables, de modo que no habrá reivindicación de cosas fungibles o genéricas. Por ello, se señala que, en el caso de mutuo de cosas ajenas (fungibles), el dueño puede reivindicar siempre que las especies sean identificables (artículo 2202 del Código Civil), pero si son identificables, no serán fungibles” (Hernán Corral Talciani, “Curso de Derecho Civil: Bienes”, Segunda Edición, Legal Publishing 2022, pp. 587-588).

En el mismo sentido don Alejandro Guzmán Brito: “[...] solo pueden ser reivindicadas las cosas infungibles o identificables; si no lo sean, no resulta posible que, en el conjunto de las existentes, sean señaladas por alguien para separarlas como propias a diferencia de las restantes, que son ajenas. Si son todas iguales, ¿cómo alguien podría ejecutar semejante operación discriminadora en un conjunto



de cosas confundidas y no pre-identificadas por algún signo exterior?; cuando, en la realidad, los fungibles que estuvieron en el poder de uno, al que llamamos “dueño”, pasan al de otro por hurto o un título no traslativo de dominio, como por comodato, arrendamiento, prenda, depósito, usufructo, etcétera, el efecto no es, pues, la subsistencia de un “dominio” en favor del que dejó de tenerlos, sino sólo la adquisición de una acción personal para cobrarlos” (Alejandro Guzmán Brito, “El Depósito Irregular en el Derecho Chileno”, Revista Chilena de Derecho Privado, N° 23, pp. 87-137, diciembre 2014)

Undécimo: Que en mérito de lo expuesto, no es posible aceptar las infracciones denunciadas y el recurso de casación en análisis no puede prosperar por adolecer de manifiesta falta de fundamento.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo dispuesto en el artículo 782 del Código de Procedimiento Civil, **se rechaza** el recurso de casación en el fondo interpuesto por el abogado Eduardo Alberto Gallardo Urbina, en representación del demandante, en contra de la sentencia de tres de noviembre de dos mil veintitrés, dictada por la Corte de Apelaciones de Antofagasta.

Regístrese y devuélvase, vía interconexión.

Rol N° 247.983-2023.-

Pronunciado por la Primera Sala de la Corte Suprema integrada por los Ministros señor Juan Eduardo Fuentes B., señor Mauricio Silva C., señora María Soledad Melo L. y los Abogados Integrantes señor Raúl Patricio Fuentes M. y señor Carlos Urquieta S.





XYJEXXSXXKH

En Santiago, a diecinueve de junio de dos mil veinticuatro, se incluyó en el Estado Diario la resolución precedente.

